

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, diecinueve (19) de octubre de dos mil veintidós (2022)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 75.

MAGISTRADA PONENTE: ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES

| | |
|---|---|
| MEDIO DE CONTROL: | ACCIÓN DE GRUPO |
| EXPEDIENTE: | 76109333300220080007102 |
| DEMANDANTE: | AZARIAS ALOMIA RIASCOS Y OTROS abogadosconsultoresltd@hotmail.com jorwilsonk@hotmail.com 3136133046 |
| DEMANDADO: | MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE procesosjudiciales@minambiente.gov.co MINISTERIO DEL INTERIOR notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co MINISTERIO DE TRANSPORTE notificacionesjudiciales@mintransporte.gov.co CVC. notificacionesjudiciales@cvc.gov.co gabrielpenillas@hotmail.com DISTRITO DE BUENAVENTURA notificaciones_judiciales@buenaventura.gov.co dir_juridico@buenaventura.gov.co DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA njudiciales@valledelcauca.gov.co INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS njudiciales@invias.gov.co INTEGRANTES DEL CONSORCIO PROGRESO BUGA ¹ jairoroso1@yahoo.com QBE SEGUROS S.A. notificaciones.co@zurich.com |
| Solicitante acceso a Expediente digital | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO william.salamanca@minjusticia.gov.co |
| ASUNTO | AUTO QUE DECLARA LA NULIDAD DE LO ACTUADO |

PUBLICIDAD.

El expediente digital se encuentra nuestra sede electrónica **SAMAI**, donde podrá consultar las actuaciones en el botón **“CONSULTA DE PROCESOS”** en el siguiente link <https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx>.

En SAMAI también encontrará la VENTANILLA VIRTUAL, donde los sujetos procesales podrán **radicar memoriales y escritos** para lo cual deben ingresar a la VENTANILLA VIRTUAL, dirigirse al módulo “Solicitudes y otros servicios en línea”, dar clic en “Memoriales y/o Escritos”, aceptar términos y condiciones, diligenciar el formulario respectivo anexando copia del documento de identidad que acredite su calidad dentro del proceso y cargar los archivos con destino al proceso en los formatos permitidos

¹ Cadsa Gestiones y Proyectos S.A., Lobo Guerrero Construcciones Ltda., Concrearmado Ltda., Lavicol Ltda., Reyes y Riveros Ltda., Geofundaciones S.A., Sociedad Melo y Álvarez Proyectistas y Constructores Asociados Ltda., CEIC Ltda., Constructora Castell Camel Ltda., Constructora Precomprimidos S.A. y Consultores Civiles e Hidráulicos Ltda.



pdf,.docx,.doc,.xlsx. Tamaño máximo por cada archivo: 20 MB. Estos memoriales y escritos se gestionarán directamente al proceso, lo que garantiza celeridad, economía, eficiencia, transparencia y publicidad, **por tanto, es el canal oficial del Tribunal para recibir memoriales.**

En el mismo link los usuarios podrán solicitar ACCESO A LOS EXPEDIENTES para consultar documentos protegidos por reserva, para ello deben dirigirse al módulo “Solicitudes y otros servicios en línea”, dar clic en “Acceso a expedientes” aceptar términos y condiciones, diligenciar el formulario respectivo y anexar el documento de identidad escaneado por ambos lados con el fin de acreditar su calidad dentro del proceso. En el siguiente link podrá consultar un video tutorial que lo guiará en SAMAI: [acceso a la ventanilla virtual.webm](https://www.youtube.com/watch?v=...).

Solo de manera subsidiaria continuarán recibiendo escritos y memoriales en el correo electrónico: rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co identificando la radicación completa del expediente, el magistrado ponente, el medio de control, las partes y el asunto so pena de no gestionar el memorial. Las partes darán cumplimiento al artículo 78.14 del CPG.

De celebrarse alguna audiencia se hará a través de la plataforma LIFESIZE.

OBJETO DE LA DECISIÓN

El expediente se encuentra a despacho para resolver un recurso de queja, pero, en uso de los poderes de dirección del proceso y saneamiento procesal, se impone declarar una nulidad insanable.

I. ANTECEDENTES

Con sentencia del 20 de marzo de 2019 este Tribunal dispuso:

“PRIMERO. - CONFIRMAR el auto de auto 069 de 24 de abril de 2009 proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de Buenaventura que aceptó el llamamiento en garantía de QBE Seguros S.A. antes Compañía de Seguros Central de Seguros S.A.

SEGUNDO. - REVOCAR la sentencia de 25 de septiembre de 2018 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Buenaventura, que negó las pretensiones de la demanda, por lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO. - DECLARAR probada la excepción de inexistencia de la obligación contractual por falta de cobertura postulada por Previsora Seguros.

CUARTO.- DECLARAR al Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, el Distrito de Buenaventura, el Departamento del Valle del Cauca, el Instituto Nacional de Vías y a los integrantes del Consorcio Progreso Buga, administrativa, civil, patrimonial y solidariamente responsables por falla del servicio de prevención del riesgo que derivó en la muerte de treinta y cinco personas y la desaparición de dos personas, el 12 de abril de 2006, en la vía Cabal Pombo del Departamento del Valle del Cauca, conforme a lo motivado.

QUINTO.- CONDENAR al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Transporte, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, el Distrito de Buenaventura, el Departamento del Valle del Cauca, el Instituto Nacional de Vías y a los integrantes del Consorcio Progreso Buga, a pagar a los familiares y terceros damnificados por la muerte y desaparición de treinta y siete personas en los hechos ocurridos el 12 de abril de 2006, los perjuicios morales que se les causaron, con las pautas dispuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO. - DECLARAR no probadas las excepciones postuladas por QBE SEGUROS S.A., antes Compañía de Seguros Central de Seguros S.A.

SÉPTIMO. - CONDENAR a QBE SEGUROS S.A., antes Compañía de Seguros Central de Seguros S.A., con cargo a la póliza de seguro de responsabilidad civil No. 120100000432, a pagar a las víctimas, por intermedio del Fondo para la Defensa de los



Derechos e intereses Colectivos, la parte de la indemnización que le corresponde al Instituto Nacional de Vías - INVIAS, hasta el límite de cobertura de la póliza.

OCTAVO. - ORDENAR que el monto total de la indemnización se entregue al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, el cual será administrado por el Defensor del Pueblo y a cargo del cual se pagarán:

1. **Las indemnizaciones individuales de quienes formaron parte del proceso como integrantes del grupo.** Para el efecto, el a *quo* elaborará un listado de los demandantes y las pruebas del estado civil del nivel 1 y 2; del estado civil y la relación afectiva en los niveles 3 y 4; y de la condición de tercero damnificado en el nivel 5.
2. Las indemnizaciones correspondientes a las solicitudes que llegaren a presentar oportunamente los interesados que **no** hubieren intervenido en el proceso y que reúnan los requisitos exigidos en esta sentencia, con las mismas pautas.
3. Todas las solicitudes presentadas oportunamente se tramitarán y decidirán conjuntamente mediante Acto Administrativo en el cual se reconocerá el pago de la indemnización previa comprobación de los requisitos exigidos en esta sentencia y el listado que elaborará el a *quo*.
4. Cuando el monto de las indemnizaciones fuere inferior a las solicitudes presentadas, los dineros restantes después de haber pagado todas las indemnizaciones serán devueltos al demandado.

NOVENO. - EXHORTAR al DISTRITO DE BUENAVENTURA que gestione las modificaciones de su Plan de Ordenamiento Territorial, establezca una política pública de identificación del riesgo y las zonas afectadas y diseñe e implemente programas de reubicación de la población en situación de riesgo en la ribera del Rio Dagua, si aún no lo ha hecho.

DÉCIMO.- ORDENAR la publicación, por una sola vez, de un extracto de la sentencia, en un diario de amplia circulación nacional, dentro del mes siguiente a su ejecutoria o a la notificación del auto que hubiere ordenado obedecer lo dispuesto por el superior, con la prevención a todos los interesados igualmente lesionados por los mismos hechos y que no concurrieron al proceso, para que se presenten al Juzgado, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación, para reclamar la indemnización.

DÉCIMO PRIMERO. - En aplicación de lo dispuesto en el artículo 65.5 de la Ley 472 de 1998 se condena en costas a los demandados, las cuales serán liquidadas por el Juzgado de origen en los términos de ley. Se liquidarán y pagarán honorarios del abogado coordinador, que corresponderán al diez por ciento (10%) de la indemnización que obtengan cada uno de los miembros del grupo que no haya estado representado judicialmente.

DÉCIMO SEGUNDO. - Notificada esta providencia remítase el expediente al juzgado de origen”.

Con auto de 15 de mayo de 2019 la Sala de Decisión corrigió el fallo en el sentido de indicar que su fecha era 20 de marzo de 2019. Además, negó la solicitud de adición y aclaración.

Con auto 331 de **10 de junio de 2019** el Juzgado dispuso obedecer y cumplir lo resuelto por el Tribunal.

Con auto **395** de **5 de julio de 2019** se hizo constar que la publicación del extracto de la sentencia en el diario de amplia circulación nacional se hizo desde el domingo 30 de junio de 2019 y que los 20 días que tenían los interesados para comparecer vencerían el **29 de julio de 2019**.



El 10 de febrero de 2021 el Ministerio de Transporte formuló recurso extraordinario de revisión contra la sentencia, pero se desconoce su radicación y estado procesal.

Con auto **142** de **25 de febrero de 2021** el juzgado consignó que en el término de ley **“concurrió un número considerable de personas que se consideran lesionadas y no acudieron al proceso”**; que se comunicó telefónicamente con el distrito para obtener el listado de víctimas mortales del siniestro sin obtenerlo; y resolvió fijar fecha para realizar una inspección judicial al interior de la Alcaldía para encontrar los listados.

Con auto **150** de **4 de marzo de 2021** el juzgado manifestó que obtuvo el listado y por tanto no llevaría a cabo la diligencia de inspección.

Con Auto **279** del **28 de abril de 2021** el Juzgado dijo que *“en el numeral octavo de la parte resolutive de la sentencia del Tribunal Administrativo, se ordenó que este Despacho Judicial, como ad quo, debe elaborar un listado de los demandantes que conforman el grupo, así mismo debe verificarse las pruebas del estado civil, de la relación afectiva y/o de la condición de tercero damnificado correspondientes a los diferentes niveles establecidos por el Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación, a fin de proceder a liquidarles y reconocerles el pago de la indemnización respectiva”*. Agregó que intentó obtener el listado de víctimas y lo consiguió.

Luego escribió:

“y con el fin de dar cumplimiento a la orden emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA en la sentencia de segunda instancia, procedió el juzgado a verificar si las personas que comparecieron dentro del término legal para conformar el grupo indemnizable, reunían los requisitos para tal efecto.

En esa medida para conformar el grupo indemnizable, como lo dijo el Tribunal Administrativo del Valle, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014, respecto al reconocimiento de los perjuicios morales en caso de muerte de un familiar por consanguinidad o civil o terceros damnificados, condiciones que se resumen en el siguiente cuadro: (

...)

Seguidamente entonces, se elaborará un cuadro que tiene como título “PRUEBAS SIQUIERA SUMARIAS QUE FALTAN POR APORTAR DE LOS FAMILIARES DEL FALLECIDO O DESAPARECIDO (... Nota: aquí se indica el nombre del fallecido o desaparecido)”. De entrada se aclara que si en la columna denominada “NOMBRES Y APELLIDOS” no aparecen o no se relacionan los nombres de algunos que comparecieron dentro del término legal para la conformación del grupo indemnizable, es por dos razones a saber: 1.- Por que sí probaron debidamente que sí tienen relación afectiva, conyugal, paterno filial, de consanguinidad, civil, o relación afectiva no familiares como los terceros damnificados, con el fallecido o desaparecido. 2.- Porque al analizar los documentos que aportaron se comprueba que no tienen ningún derecho a la indemnización.

Estas dos circunstancias, es decir, los nombres de quienes sí cumplen con los requisitos y los que no, se indicará en una providencia posterior que emitirá el juzgado donde estarán totalmente relacionadas las personas quienes definitivamente tienen derecho a la indemnización y quienes no tienen derecho a la misma.



Ahora bien, cuando en la columna denominada “OBSERVACIONES” del extenso cuadro que a continuación elabora, se establece que se encuentra pendiente la prueba de la relación afectiva quiere decir que debido a que el demandante pertenece a los niveles 3, 4 ó 5, por lo tanto debe probar siquiera sumariamente el dolor o aflicción, el sentimiento de desesperación, congoja, desasosiego, temor o zozobra que lo invadió por el fallecimiento o desaparición de la persona por quien reclama dichos perjuicios, mientras que los demandantes pertenecientes a los niveles 1 y 2 no necesitan dicha prueba excepto los hijos de crianza, quienes a pesar de tener los mismos derechos de un hijo por consanguinidad respecto al monto de indemnización, deben probar la relación afectiva y la afectación.

Del mismo modo, cuando se solicita los registros civiles de los ascendientes o descendientes se debe aportar los de los padres, abuelos, hijos, etc, que hayan tenido relación de consanguinidad con la persona fallecida o desaparecida por quien se reclaman los perjuicios.

Aquí se pone de presente a todas las partes de este proceso, que el juzgado atenderá y aplicará para analizar todas las pruebas que pretendan demostrar con el fallecido o desaparecido los lazos de consanguinidad, afinidad, afectivas, etc., el concepto o criterio de la PRUEBA SUMARIA que tiene la Corte Constitucional y que claramente lo expuso en la Sentencia T-199 de 2004, donde actúa como Magistrada Ponente la Dra. Clara Inés Vargas Hernández, de la siguiente manera:

“No obstante, de vieja data, la doctrina y la jurisprudencia nacionales han precisado la noción de prueba sumaria. Así, para Antonio Rocha Alvira, la prueba sumaria es aquella que aún no ha sido controvertida por aquel a quien puede perjudicar. En efecto, de conformidad con el artículo 29 Superior, toda prueba para ser considerada como tal debe ser sometida al principio de contradicción del adversario, lo cual significa que, aunque de hecho en el proceso no haya sido controvertida, por ejemplo, porque la contraparte lo consideró inútil o haya dejado pasar la etapa procesal para hacerlo, se haya tenido la oportunidad procesal de hacerlo. De igual forma, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la prueba sumaria es plena prueba, lo que quiere decir que debe reunir las mismas condiciones de fondo de cualquier prueba, es decir, que sea pertinente o conducente, esto es, que sea la adecuada para demostrar un hecho o un acto jurídico concretos. Es más, en algunos casos, la ley dispone no la libertad probatoria, sino que, por el contrario, ciertos hechos deban ser demostrados únicamente de determinada manera.”

Esta decisión de aplicar aquí la prueba sumaria la adopta el juzgado, teniendo en cuenta, en primer lugar, que estamos frente a una acción constitucional donde ya se ha emitido una sentencia que se encuentra debidamente ejecutoriada, por ende, no puede ahora convertirse de ninguna manera en una instancia más para controvertir pruebas, y en segundo lugar, tratándose como en este caso en que el terreno donde ocurrió la tragedia del 12 de abril de 2006 en el Corregimiento de Bendiciones, según las pruebas que obran en el expediente, era un asentamiento subnormal de personas desplazadas por la violencia, de muy escasos recursos económicos, personas ante las cuales el Estado colombiano, a través de los Jueces de la República, debe proteger sus derechos con más firmeza al encontrasen en un grupo de extrema vulnerabilidad. Una vez dicho lo anterior se elabora el cuadro que contiene la información ya relacionada y se concederá un término de TREINTA (30) DÍAS a la parte demandante para que allegue las pruebas requeridas en la columna denominada “OBSERVACIONES”.

Y luego de un listado de 128 páginas resolvió:



“CONCEDER un término de TREINTA (30) DÍAS a la parte demandante para que allegue las pruebas requeridas en la columna denominada “OBSERVACIONES”, del cuadro que tiene como título “PRUEBAS SIQUIERA SUMARIAS QUE FALTAN POR APORTAR DE LOS FAMILIARES DEL FALLECIDO O DESAPARECIDO”.

Por auto **114** de **18 de febrero de 2022** el Juzgado, entre otras determinaciones, presentó un cuadro que afirmó contenía la liquidación de los perjuicios morales de cada uno de los reclamantes que cumplieron con los requisitos para el pago y de los que aún quedaban pendientes por aportar pruebas para su reconocimiento, así como de aquellos a quienes se le negaba el derecho. Además, resolvió que las condenadas pagaran 45.475 smlmv, es decir la suma de \$37.650´293.940, dentro de los 10 días siguientes, al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, quien una vez recibiría el dinero de las entidades y sociedades condenadas, y pagaría las indemnizaciones individuales a las personas incluidas en la relación de la liquidación de los perjuicios morales.

El **10 de marzo de 2022**, el apoderado de la CVC, promovió incidente de nulidad procesal porque no se le notificó el Auto 279. Y recurrió en reposición y en subsidio apelación el auto No 114.

Con auto **224** del 1º de abril de 2022, notificado por estado el 20 del mismo mes y año, el Juzgado declaró la nulidad parcial de la notificación del Auto 279, únicamente a favor de la CVC, y; advirtió que los términos de ejecutoria solo empezaban a correr, respecto de la CVC, a partir del día siguiente al de la ejecutoria del auto que declaró la nulidad. Por demás, negó la nulidad del Auto Interlocutorio 114, porque consideró que la irregularidad quedaba subsanada por cuanto la entidad afectada presentó los recursos de reposición y de apelación; los cuales, de paso, desestimó.

Inconforme, la CVC solicitó aclaración y adición pues en su criterio la nulidad cobijaba el auto 114.

Por auto **237** del **18 de abril de 2022** el Juzgado entre otras determinaciones: i) negó la solicitud de aclaración y adición del Auto 224; ii) repuso el Auto Interlocutorio 114 para incluir reclamaciones presentadas el 29 de julio de 2019 y les concedió el término de 10 días para que acreditaran la condición de damnificados y en consecuencia, incrementó el monto de la condena a 55.670 smlmv.

El **22 de abril de 2022**, el apoderado de la CVC presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra el auto **279**. Reprochó que se hubiere otorgado un plazo adicional a los damnificados para que acreditaran la respectiva condición e indicó que el auto era apelable conforme el artículo 243.4 que se refiere al “auto que resuelva el incidente de liquidación de la condena en abstracto o de los perjuicios” Por demás, insistió en que se debió declarar la nulidad del 114 de 8 de febrero de 2022 y siguientes.

Con auto **364** del **23 de junio de 2022** el Juzgado resolvió no reponer el auto 279 y negó el recurso de apelación subsidiario con fundamento en que:

- El auto No 279 contiene la relación de personas que se vincularon oportunamente al proceso y las pruebas que les faltaba para poder reclamar el pago de los perjuicios morales.
- Dentro del término de 20 días previsto en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, no se presentaron “nuevas personas” a reclamar perjuicios.
- La calidad de damnificado no solo puede probarse en el transcurso del proceso hasta la sentencia, sino también posteriormente a su ejecutoria, situación que aplica tanto para los que se presentan durante los 20 días después de la publicación del extracto de la sentencia como para los que se presentaron a reclamar durante el transcurso del proceso, sin que sea requisito demostrar dentro de los términos del artículo 55 de la ley 472 de 1998, su condición de damnificado.
- La providencia no es susceptible de apelación porque no encaja en ninguna de las mencionadas en el artículo 243 del CPACA modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, como tampoco en el artículo 321 del CGP, y; el auto No 279 no puede entenderse como



un incidente de liquidación de perjuicios de condena en abstracto, en la medida en que en la acción constitucional de grupo resulta improcedente emitir condena en abstracto, lo que debe hacerse es lo señalado en el artículo 65 de la Ley 472 de 1998, esto es, un ponderado de los perjuicios para posteriormente entregarlos al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.

- Adicionalmente, en esa providencia estableció el listado “definitivo” del grupo, para efectos de otorgar la indemnización.
- Finalmente, advirtió que “contra el presente auto no procede recurso de reposición, en la medida en que resuelve recursos de reposición interpuestos contra autos preexistentes, conforme lo expuesto en el artículo 318 del CGP”.

El **1° de julio de 2022** el apoderado de la CVC presentó recurso de reposición y en subsidio queja contra el auto 364, por estimar que el auto 279 sí era apelable.

Por auto **493** del 5 de agosto de 2022, el Juzgado resolvió: 1. no tramitar el recurso de reposición por improcedente ni conceder el recurso de queja. 2. Imponer multa al apoderado por presentar recursos improcedentes y dilatar el proceso. (...)7. Ordenó a las accionadas consignar el monto de 55.670 smmlmv a orden del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos –Defensoría del Pueblo. Sustentó la decisión en que la CVC no formuló de manera principal el recurso reposición contra la decisión que se negó a conceder la apelación. Por demás, incluyó nuevas personas en el listado definitivo de personas con derecho a indemnización, pues, según afirmó, por error del despacho no fueron incluidas previamente.

Con sentencia de tutela de **8 de septiembre de 2022** dictada dentro del proceso 76001-23-33-000-2022-00763-00 se dejó sin efectos los numerales 1° y 2° del auto 493 y se ordenó al juzgado dar trámite al recurso de queja propuesto por la CVC y suspender el cumplimiento del numeral 7, hasta tanto el juez de segunda instancia de la acción de grupo resuelva el recurso de queja o disponga otra cosa. Lo anterior, con fundamento en que la CVC sí presentó recurso de reposición contra el auto 364 del 23 junio 2022 (que negó la apelación) y como subsidiario el de queja, luego resultaba procedente su concesión. Por demás se declaró improcedente el amparo solicitado respecto de los Autos 224, 237 y 364 por no agotar medios de defensa a su alcance y falta de argumentación.

Con auto de **9 de septiembre de 2022** el juzgado dijo dar cumplimiento a la tutela y concedió el recurso de queja ante esta Corporación.

El expediente se radicó en el tribunal el 20 de septiembre de 2022 (Samai índice 1)

Una vez surtido el traslado del recurso, se realizaron los siguientes pronunciamientos:

INVIAS coadyuvó el recurso el recurso de queja propuesto por la CVC con el argumento que:

- Se trata de una liquidación del crédito susceptible de ser apelada.
- El Juzgado reabrió la oportunidad probatoria y además no corrió traslado de las pruebas aportadas, lo cual configura la causal de nulidad prevista en el artículo 133.8 del CGP.
- Ello aunado a que cada persona que pretende la integración al proceso aumenta la condena impuesta a las entidades obligadas, lo cual escapa al procedimiento previsto en la ley para el efecto, según el cual, en el trámite del proceso se debía acreditar la calidad y los perjuicios sufridos y dentro del término de 20 días siguientes a la publicación del extracto de la sentencia, si bien era dable que se presentaran nuevas personas, ello no podía dar lugar a incrementar la condena.
- En el marco de las acciones de grupo, no existen condenas en abstracto y menos sentencias complementarias con el fin de establecer el monto de la condena. El Consejo de Estado² indicó que tampoco tiene cabida lo ocurrido como un trámite incidental, en tanto por disposición del artículo 127 del CGP es la ley la que de manera expresa indica que asuntos se tramitan por incidente.

² Providencia de 4 de mayo de 2017 11001-03-15-000-2016-02961-01(AC)



La parte actora sostuvo que la CVC busca dilatar el cumplimiento del fallo judicial; se corrió traslado de las pruebas y la parte demandante no se opuso a las mismas; la actuación del juzgado está dirigida a conformar el grupo de personas beneficiarias para hacer la entrega del listado al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos en cumplimiento de lo ordenado por el superior. Por lo anterior, solicitó denegar el recurso de queja y continuar con el trámite del proceso.

Finalmente, el Ministerio de Justicia pidió acceso al expediente digital, pero fue un error correr traslado de la actuación a esa cartera porque no es parte procesal.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

El juicio con acción de grupo inició en el año 2008, por tanto, no se le aplica la ley 1437 de 2011 sino el Decreto 01 de 1984, en adelante CCA.

De acuerdo con el artículo 133.3 del CCA, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca es competente para conocer los recursos de apelación y queja contra las providencias dictadas por los jueces en primera instancia.

Conforme el artículo 146A³ del CCA, corresponde al ponente dictar las decisiones interlocutorias, salvo las contempladas en los numerales 1 a 3 del artículo 181⁴ ibídem, es decir, la que rechace la demanda, la que resuelva la suspensión provisional y la que ponga fin al proceso.

Comoquiera que la decisión que se adopta no encaja dentro de las señaladas, la decisión será adoptada por la magistrada ponente.

2. Marco normativo y jurisprudencial.

La demanda se presentó en el año 2008 por ello la remisión es a la Ley 472 de 1998 sin las modificaciones que introdujo la Ley 1437 de 2011⁵.

El artículo 68 de la Ley 472 de 1998 que corresponde al título III “Del proceso en las **acciones de grupo**” prescribe: “**Aspectos no Regulados**. En lo que no contrarie lo dispuesto en las normas del presente título, se aplicarán a las Acciones de Grupo las normas del **Código de Procedimiento Civil**”, hoy, Código General del Proceso.

Atendiendo el precedente vinculante emanado de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo en auto de unificación de 25 de junio de 2014, el **Código General del Proceso** es aplicable en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a partir del 25 de junio de 2014, tanto en los procesos que se tramitan por la Ley 1437 de 2011 como aquellos que se tramitan por el Decreto 01 de 1984.

El artículo 133 del CGP dispone:

El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
(...)

³ Las decisiones interlocutorias del proceso, en única, primera o segunda instancia, proferidas por los tribunales administrativos y el Consejo de Estado, serán adoptadas por el magistrado ponente. Sin embargo, las decisiones a que se refieren los numerales 1, 2, 3 del artículo 181 serán de Sala excepto en los procesos de única instancia.

⁴ Artículo 181: Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales de los Jueces y los siguientes autos proferidos en la misma instancia por dichos organismos, en pleno o en una de sus Secciones o Subsecciones, según el caso; o por los Jueces Administrativos: 1. El que rechace la demanda. 2. El que resuelva sobre la suspensión provisional. 3. El que ponga fin al proceso. 4. El que resuelva sobre la liquidación de condenas. 5. El que apruebe o impruebe conciliaciones prejudiciales o judiciales. 6. El que decreta nulidades procesales. 7. El que resuelva sobre la intervención de terceros. 8. El que deniegue la apertura a prueba, o el señalamiento del término para practicar pruebas, o el decreto de alguna pedida oportunamente o deniegue su práctica. El recurso contra los autos mencionados deberá interponerse directamente y no como subsidiario de la reposición. Por regla general el recurso se concederá en el efecto suspensivo.

⁵ En Providencia de 3 de marzo de 2020. Radicado 05837-33-31-001-2009-00160-01 (RV) el Consejo de Estado dijo al abordar el estudio del asunto: “Al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones vigentes para la fecha de presentación de la demanda (13 de mayo de 2009), las cuales, corresponden a las contenidas en la Ley 472 de 1998 –norma especial que rige las acciones de grupo–, sin las modificaciones que introdujo la Ley 1437 de 2011, en cuanto a la pretensión, caducidad y competencia”. Cabe recordar que los artículos 145, 152.16, 155.10 y 164 del CPACA establecieron la pretensión, la oportunidad y competencia para ejercer la demanda. Sobre el particular el Consejo de Estado ha dicho: “Como estas disposiciones son distintas a las preceptuadas sobre la materia en la Ley 472 de 1998, la Sección Tercera de esta Corporación estableció que el CPACA (i) prevalece por ser posterior, en atención a lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 153 de 1887, (ii) solo modificó la pretensión, caducidad y competencia, por lo que los demás temas continúan regulados por la norma especial, y (iii) no buscó regular de manera integral y orgánica el medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo” (RV. De 3 de marzo de 2020. Radicado 05837-33-31-001-2009-00160-01).



2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia. (...)."

A su vez, el artículo 136 del mismo compendio normativo señala:

"(...)

PARÁGRAFO. Las nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido o premitir íntegramente la respectiva instancia, **son insaneables**".

La doctrina recuerda⁶:

"La administración de justicia está organizada jerárquicamente razón por la cual las decisiones del superior son de obligatoria observancia para el inferior, quien, así esté en desacuerdo con ellas, debe acatarlas y cumplirlas. Si se desconoce ese elemental deber de obediencia a lo resuelto por el superior, por ejemplo se ordena la entrega de un bien levantando el embargo que pesaba sobre él y el inferior insiste en mantenerlo o el superior revoca una sentencia absolutoria y la vuelve condenatoria y el inferior se niega a tramitar las etapas indispensables para su cumplimiento, se violan elementales reglas de la organización judicial que dan origen a un vicio, que se erige como uno de los motivos de esta causal de nulidad. De la misma manera considera el legislador la actuación que adelanta el juez cuando revive tramitaciones de procesos que han terminado en forma legal, porque esa actuación es abiertamente contraria a la ley que señala la competencia del juez.

En consecuencia, **si con posterioridad a la terminación de un proceso por desistimiento, transacción, perención o sentencia, el juez pretende proseguir la actuación, salvo obviamente lo que tiene que ver con su cumplimiento, aquella quedará viciada de nulidad**. La norma se refiere a una actuación posterior que implique revivir un proceso ya terminado, lo cual no excluye que el juez pueda realizar, válidamente, ciertos actos en orden al cumplimiento de la providencia ejecutoriada que la ley expresamente determina y otros que en nada inciden sobre la causa que originó la finalización del proceso, como, por ejemplo, que se solicitara un desglose, una certificación o unas copias, **pues la disposición sólo erige en nulidad el hecho de que la nueva actuación cambie o modifique las relaciones jurídicas definidas en el proceso finalizado**, sin que ello implique que no pueda haber ciertas tramitaciones que no incidan en lo ya resuelto".

3. La nulidad insaneable en la actuación surtida por el juzgado.

En el marco de la Ley 472 de 1998, de manera expresa y clara, el Tribunal dispuso en la sentencia condenatoria de segunda instancia que el Fondo para la Protección de los Derechos e Intereses Colectivos, con cargo a los recursos que consignarían los demandados pagaría:

- i) Las **indemnizaciones individuales de quienes formaron parte del proceso** como integrantes del grupo. "*Para el efecto, el a quo **elaborará un listado de los demandantes** y las pruebas del estado civil del nivel 1 y 2; del estado civil y la relación afectiva en los niveles 3 y 4; y de la condición de tercero damnificado en el nivel 5*".
- ii) Las indemnizaciones de las solicitudes oportunas que presentaran los interesados **que no hubieran intervenido en el proceso** y que reúnan los requisitos exigidos en esta sentencia.

Insistió en que el pago de la (i) indemnización respecto de las solicitudes presentadas oportunamente, previa comprobación de los requisitos exigidos, y (ii) las que

⁶ Hernán Fabio López Blanco. Código General del Proceso, Parte General. Dupre Editores Ltda., 2016.



corresponden al listado elaborado por el a-quo, se tramitarían y decidirían de manera conjunta en **acto administrativo**.

Por último, ordenó publicar un extracto de la sentencia **para que quienes no concurrieron al proceso** a reclamar la indemnización, lo hicieran dentro de los 20 días siguientes a la publicación, en los precisos términos del artículo 55 de la Ley 472 de 1998.

La orden se sustentó en Ley 472 de 1998 que de manera clara y expresa dispone:

“ARTICULO 65. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia que ponga fin al proceso se sujetará a las disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil y además, cuando acoja las pretensiones incoadas, dispondrá:

1. El pago de una indemnización colectiva, que contenga la suma ponderada de las indemnizaciones individuales.

2. El señalamiento de los requisitos que deben cumplir los beneficiarios que han estado ausentes del proceso a fin de que puedan reclamar la indemnización correspondiente, en los términos establecidos en el artículo 61 de la presente ley.

3. El monto de dicha indemnización se entregará al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, el cual será administrado por el Defensor del Pueblo y a cargo del cual se pagarán:

a) Las indemnizaciones individuales de quienes formaron parte del proceso como integrantes del grupo, según la porcentualización que se hubiere precisado en el curso del proceso. El Juez podrá dividir el grupo en subgrupos, para efectos de establecer y distribuir la indemnización, cuando lo considere conveniente por razones de equidad y según las circunstancias propias de cada caso;

b) Las indemnizaciones correspondientes a las solicitudes que llegaren a presentar oportunamente los interesados que no hubieren intervenido en el proceso y que reúnan los requisitos exigidos por el Juez en la sentencia.

Todas las solicitudes presentadas oportunamente se tramitarán y decidirán conjuntamente mediante Acto Administrativo en el cual se reconocerá el pago de la indemnización previa comprobación de los requisitos exigidos en la sentencia para demostrar que forma parte del grupo en cuyo favor se decretó la condena.

Cuando el estimativo de integrantes del grupo o el monto de las indemnizaciones fuere inferior a las solicitudes presentadas, el Juez o el Magistrado podrá revisar, por una sola vez, la distribución del monto de la condena, dentro de los veinte (20) días siguientes contados a partir del fenecimiento del término consagrado para la integración al grupo de que trata el artículo 61 de la presente ley. Los dineros restantes después de haber pagado todas las indemnizaciones serán devueltos al demandado.

4. La publicación, por una sola vez, de un extracto de la sentencia, en un diario de amplia circulación nacional, dentro del mes siguiente a su ejecutoria o a la notificación del auto que hubiere ordenado obedecer lo dispuesto por el superior, con la prevención a todos los interesados igualmente lesionados por los mismos hechos y que no concurrieron al proceso, para que se presenten al Juzgado, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación, para reclamar la indemnización.

5. La liquidación de las costas a cargo de la parte vencida, teniendo en cuenta las expensas necesarias para la publicación del extracto de la sentencia.

6. La liquidación de los honorarios del abogado coordinador, que corresponderá al diez por ciento (10%) de la indemnización que obtengan cada uno de los miembros del grupo que no hayan sido representados judicialmente”.

Así como los artículos de la misma ley que prescriben:

“ARTICULO 48. TITULARES DE LAS ACCIONES. Podrán presentar acciones de grupo las personas naturales o jurídicas que hubieren sufrido un perjuicio individual conforme lo establece el artículo 47. (...)

(...)

ARTICULO 55. INTEGRACION AL GRUPO. <Aparte tachado INEXEQUIBLE. Aparte subrayado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Cuando la demanda se haya originado en daños ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u omisión, o por varias acciones u omisiones, derivadas de la vulneración de derechos o intereses colectivos, quienes hubieren sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del



proceso, antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo. ~~Quien no concurra al proceso, y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado de conformidad con las disposiciones vigentes,~~ podrá acogerse posteriormente, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la información anterior, pero no podrá invocar daños extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización mayor y tampoco se beneficiará de la condena en costas.

La integración de nuevos miembros al grupo, con posterioridad a la sentencia, no incrementará el monto de la indemnización contenida en ella.

Las acciones individuales relativas a los mismos hechos podrán acumularse a la acción de grupo, a solicitud del interesado. En este evento, el interesado ingresará al grupo, terminará la tramitación de la acción individual y se acogerá a los resultados de la acción de grupo.

Lo anterior en el marco de sentencia C-215 de 1999 de la Corte Constitucional, que consideró que el término de 20 días no constituía una violación del debido proceso porque:

“De conformidad con el artículo bajo examen, se establecen dos modalidades a través de las cuales, las personas afectadas en un derecho o interés colectivo que hubieren sufrido un perjuicio, pueden hacerse parte del proceso iniciado en virtud de una acción de grupo: **el primero, antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el que se indique el daño sufrido, su origen y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al grupo;** el segundo, dentro de los veinte días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la misma información y siempre que su acción no haya prescrito o caducado.”

Para la Corporación, dicha disposición no vulnera el debido proceso; por el contrario, asegura la efectividad del principio del Estado social de derecho y en particular, uno de los fines esenciales del Estado, como lo es el de garantizar la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución, uno de ellos, el que tiene toda persona para acceder a la administración de justicia.

Y es que la finalidad perseguida por la norma demandada es de una parte, permitir a aquellas personas que sufrieron un mismo daño o perjuicio a un derecho o interés de la colectividad, y que por motivo de desinformación, desconocimiento u otro, no conocieron de la existencia del proceso puedan, previo el lleno de unos requisitos fijados en la norma, acogerse a los beneficios de la sentencia. Ello no sólo favorece al particular, sino también a la administración de justicia, pues evita que ésta se desgaste con un nuevo proceso por los mismos hechos y contra la misma persona. Además, es pertinente señalar, que dada la naturaleza reparadora de esta acción, **es válido para quien no se hizo parte en el proceso antes del fallo**, que lo haga con posterioridad, dentro de las condiciones fijadas en la norma. Ello no desconoce en ningún caso, el debido proceso, pues quien se acoge al fallo, lo hace a sabiendas del contenido del mismo y del respeto y garantía que al trámite del proceso le dio el juez, siempre avalado con la intervención del Ministerio Público. (...)”

ARTICULO 66. EFECTOS DE LA SENTENCIA. La sentencia tendrá efectos de cosa juzgada en relación con quienes fueron parte del proceso y de las personas que, perteneciendo al grupo interesado no manifestaron oportuna y expresamente su decisión de excluirse del grupo y de las resultados del proceso. (Resaltado por el Despacho).

Como claramente dispone la ley y se ordenó en la sentencia de segunda instancia:

Las personas que hubieran sufrido un perjuicio pueden hacerse parte del proceso en dos oportunidades: a) antes de la apertura a pruebas y, b) dentro de los 20 días siguientes a la publicación de la sentencia.



La indemnización colectiva corresponde a la suma ponderada de las indemnizaciones individuales.

El monto de la indemnización se entrega al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos quien se encarga de administrar los recursos producto de la condena.

El Fondo tiene a su cargo pagar las indemnizaciones individuales y la de quienes se presenten dentro de los 20 días siguientes a la publicación del fallo y cumplan los requisitos exigidos en la sentencia.

En este último caso, decide de manera conjunta en un solo acto administrativo, sobre las peticiones de las personas que alegan la condición de beneficiarios, previa comprobación de los requisitos exigidos en la sentencia.

Quienes participaron como parte demandante en el proceso tuvieron la oportunidad de acreditar su afectación, precisamente por ello es que se permite su intervención hasta antes del auto de pruebas.

La integración de nuevos miembros no incrementa el monto de la indemnización.

Se hace la anterior digresión porque la orden dictada por el Tribunal en el fallo de segunda instancia fue clara en señalar que el daño antijurídico indemnizable derivaba de la muerte y desaparición de 37 personas.

También fue claro al imponer que se aplicarían las pautas establecidas por el Consejo de Estado con base en su cercanía afectiva así:

Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio (100 smlmv).

Nivel No. 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel No. 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.

Nivel No. 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel No. 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

Para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva.

Fue perentorio al ordenar que la indemnización colectiva sería equivalente a la suma ponderada de las indemnizaciones individuales por concepto de perjuicios morales.

Fue enfático al declarar que el monto total de la indemnización se entregaría al Fondo para la Protección de los Derechos e Intereses Colectivos, el cual pagaría:

- i) Las indemnizaciones individuales.
- ii) Las indemnizaciones de aquellos que no hubieran intervenido en el curso del proceso, sino dentro de los 20 días siguientes a la publicación del extracto de la sentencia.

Para el primer caso, esto es, para las personas que comparecieron la proceso, es decir, fueron demandantes y se reconoció indemnizaciones individuales **se ordenó al juez elaborar el listado**, es decir, la lista de quienes acudieron al proceso antes de la apertura a pruebas, tuvieron la oportunidad de acreditar su afectación en el curso del proceso, fueron identificados en la providencia como un **grupo cerrado**⁷. **Además, el a quo** debía hacer la relación de las pruebas que en esa oportunidad procesal ellos aportaron respecto

⁷ Sentencia C-569 de 2004



al parentesco (registro civil) y/o la afectación moral (prueba de la relación afectiva) conforme al grado de parentesco o nivel de cercanía definidos en la jurisprudencia.

Para el segundo caso, esto es, para las personas que con posterioridad al fallo pidieran la integración al grupo, correspondía al Fondo para la Protección de los Derechos e Intereses Colectivos **y no al juez**, verificar las solicitudes y la acreditación de los requisitos exigidos en la sentencia, previa publicación en un diario de amplia circulación.

Con base en ello el Fondo debía reconocer el pago, a través de un acto administrativo, tanto de las indemnizaciones individuales como las del grupo.

En tal sentido, la actuación del juzgado se reducía a elaborar el listado mencionado.

Al respecto el Consejo de Estado⁸ ha dicho:

“En desarrollo de la Ley 472 de 1998, el trámite de la acción de grupo que se extiende hasta la sentencia definitiva que resuelva la controversia sometida al conocimiento del juez, obedece al ejercicio de la función judicial propiamente dicha; **mientras que el procedimiento adelantado con posterioridad a la ejecutoria del fallo corresponde a una actuación esencialmente administrativa y es la que se surte ante el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, pues a dicha entidad le compete administrar los recursos producto de la condena impuesta a la entidad demandada, y decidir sobre las peticiones de las personas que alegan la condición de beneficiarios de la sentencia**, de conformidad con lo previsto en los artículos 71 y 65 de la misma ley. Esta última disposición señaló que las solicitudes presentadas con posterioridad a la sentencia se tramitarán y decidirán conjuntamente mediante acto administrativo en el cual se reconocerá el pago de la indemnización, previa comprobación de los requisitos exigidos en la sentencia para demostrar que el solicitante forma parte del grupo en cuyo favor se decretó la condena. **En suma, la competencia para la distribución de los recursos provenientes de la condena impuesta a la entidad demanda, y el trámite referido a la verificación y reconocimiento de distintos beneficiarios a los reconocidos en la sentencia que desató la acción de grupo, no es competencia del juez constitucional, sino que la competencia fue asignada por el legislador a la administración, primero, porque dicha actuación no es de carácter judicial y segundo, porque la competencia del Fondo para la Defensa de los Derechos se limita al cumplimiento de la sentencia, en los términos fijados por el juzgador, quien en últimas deberá someterse a los lineamientos fijados en la providencia respectiva**”. (Negrillas fuera de texto)

Luego, no era dable al juez de primera instancia **reabrir un proceso legalmente concluido**, como lo hizo.

En el auto 142 de 25 de febrero de 2021 el juzgado consignó que en el término de ley “concurrió un número considerable de personas que se consideran lesionadas y no acudieron al proceso” y fijó fecha para una inspección judicial.

En el auto 150 de 4 de marzo dijo que no realizaría la mentada inspección judicial.

En el auto 279 de 28 de abril de 2021 se propuso elaborar un cuadro de “pruebas siquiera sumarias que faltan por aportar” y otorgó “30 días a la parte demandante para que allegue las pruebas requeridas en la columna de observaciones”.

Todo lo anterior es clara muestra que el a quo inició una actuación posterior al fallo que no fue ordenada y que es reabrir un debate legalmente concluido.

Con las providencias relacionadas dio apertura a una nueva etapa probatoria, que no consagra ni la ley 472 de 1998 ni la sentencia con acción de grupo.

⁸ Sentencia de 26 de marzo de 2009. Radicación número: 68001-23-15-000-2001-01531-02(AG).



En el auto 114 de 18 de febrero de 2022 dijo presentar “liquidación de perjuicios morales de cada uno de los reclamantes por aportar pruebas para su reconocimiento” por valor de treinta y siete mil millones de pesos, para lo cual no tenía competencia.

Como se ve, el juzgado carecía de competencia para verificar el cumplimiento de los requisitos para reclamar la indemnización de las personas que no fueron demandantes, y más aún le estaba vedado incrementar el monto de la indemnización.

En tal sentido, dado que el juez no se limitó a cumplir la orden impuesta por esta Corporación, sino que adoptó decisiones que modifican las relaciones jurídicas ya definidas en el proceso, se impone declarar la nulidad de todo lo actuado desde el auto **142 de 25 de febrero de 2021**.

Como consecuencia de la nulidad, el juzgado deberá cumplir lo ordenado por el superior, esto es, **enlistar a las personas que acudieron al proceso antes del auto de apertura a pruebas y que hasta ese momento procesal aportaron** los registros civiles de nacimiento que acrediten el parentesco en primer y segundo grado de consanguinidad; los registros civiles de nacimiento que acrediten el parentesco en tercer y cuarto grado de consanguinidad y las pruebas anticipadas sobre la relación afectiva; y las pruebas anticipadas sobre la relación afectiva que corresponde al nivel quinto, todo respecto a las 37 personas muertas y desaparecidas durante la avalancha de lodo ocurrida el 12 de abril de 2006 en la vía Cabal Pombo del Departamento del Valle del Cauca.

En el listado consignará con toda claridad los folios en que obran tales documentos.

Finalmente, correrá traslado del listado a las partes, para que a través de sus apoderados pueden ejercer las actuaciones de control jurisdiccional que los estatutos procesales consagran en su favor, con garantía plena del ejercicio del derecho de defensa y contradicción propio de toda actuación judicial y del acceso material a la administración de justicia.

Se advierte que las únicas pruebas válidas para el efecto son las precitadas, por ser las contenidas en la ley, la jurisprudencia y la sentencia condenatoria, referentes normativos que en ningún momento consideraron como admisibles aquellas que el juzgado denominó sumarias.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Despacho 11 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

RESUELVE:

PRIMERO: INFORMAR a las partes que el canal oficial para recibir memoriales y escritos será la **VENTANILLA VIRTUAL** de Samai, como se explica en el capítulo de publicidad de esta providencia.

SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de todo lo actuado desde el auto **142 de 25 de febrero de 2021** por el Juzgado Segundo Administrativo de Buenaventura, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. ORDENAR al Juzgado Segundo Administrativo de Buenaventura cumpla estrictamente lo ordenado en la sentencia de 20 de marzo de 2019, esto es, **enlistar a las personas que acudieron al proceso antes del auto de apertura a pruebas y que hasta ese momento procesal aportaron** los registros civiles de nacimiento que acrediten el parentesco en primer y segundo grado de consanguinidad; los registros civiles de nacimiento que acrediten el parentesco en tercer y cuarto grado de consanguinidad y las pruebas anticipadas sobre la relación afectiva; y las pruebas anticipadas sobre la relación afectiva que corresponde al nivel quinto, todo respecto a las



37 personas muertas y desaparecidas durante la avalancha de lodo ocurrida el 12 de abril de 2006 en la vía Cabal Pombo del Departamento del Valle del Cauca. En el listado consignará con toda claridad los folios en que obran tales documentos. Finalmente, correrá traslado del listado a las partes, para que a través de sus apoderados pueden ejercer las actuaciones de control jurisdiccional que los estatutos procesales consagran en su favor, con garantía plena del ejercicio del derecho de defensa y contradicción propio de toda actuación judicial y del acceso material a la administración de justicia. Se advierte que las únicas pruebas válidas para el efecto son las precitadas, por ser las contenidas en la ley, la jurisprudencia y la sentencia condenatoria, referentes normativos que en ningún momento consideraron como admisibles aquellas que el juzgado denominó sumarias.

CUARTO. NEGAR la solicitud de traslado que hizo el Ministerio de Justicia y del Derecho aclarándole que no es sujeto procesal en este proceso.

QUINTO: DEVOLVER el expediente electrónico al juzgado de origen, previa anotación en SAMAI.

Esta decisión fue suscrita electrónicamente en la plataforma <http://samairj.consejodeestado.gov.co/> en donde se puede corroborar su autenticidad.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,


ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES
Magistrada